

Ovalle, trece de septiembre del año dos mil veintiuno.

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, ante este Tribunal se inició esta causa, seguida por despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones, solicitado en procedimiento de aplicación general, mediante demanda entablada por don **JORGE DEL CARMEN SAAVEDRA VASQUEZ**, cédula de identidad N° 6.173.469-4, domiciliado en calle El Talhuen sin número, comuna de Ovalle, seguida en contra de **HUMBERTO AGUIRRE S.A.**, persona jurídica del giro de su denominación, RUT N° 76.607.520-7; representada por don Alejandro Aguirre Méndez, ignora profesión u oficio, cédula de identidad N° 9.066.807-2, ambos domiciliados para estos efectos en Hacienda Tuqui sin número, comuna de Ovalle.

**SEGUNDO:** Que, el actor funda su demanda en que ingresó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia a cambio de una remuneración para la empresa con fecha 01 de marzo del año 2018, en los papeles a través de un contrato de prestación de servicios y honorarios, el cual sin embargo, de conformidad al principio de primacía de la realidad, correspondía a un contrato de trabajo. El cargo para el cual fue contratado refería a la función de administrativo, labores en terreno, y en general, para cualquier función que me encomendaba su empleador, labores que fueron realizadas en el fundo que la empresa demandada dedicaba para el trabajo agrícola, ubicado en Hacienda Tuqui sin número, comuna de Ovalle, y en los distintos puntos de la comuna, de acuerdo a las diligencias y órdenes expresas que le mandataba su ex empleador. Expone que desarrolló sus labores siempre de buena manera, con responsabilidad y seriedad. Hace presente, que si bien su ex empleador le escrituró un contrato de prestación de servicios y honorarios, en la realidad y práctica, durante toda la vigencia de la relación laboral, se configuraron los elementos de subordinación y dependencia propios de un contrato de trabajo. A saber, durante los años que trabajó para la empresa se mantuvo bajo la subordinación y dependencia del señor Alejandro Aguirre Méndez, representante legal de la demandada, cumpliendo fielmente con sus órdenes e instrucciones de trabajo. Agrega que las funciones que cumplía siempre fueron habituales y permanentes, dedicándose diariamente a las labores que le ordenaba su empleador, cumplimiento de horarios, incluso firmando registro de asistencia, estando sujeto a jornadas de trabajo claramente supeditadas al poder de mando del señor Aguirre, así también, supeditado al deber de obediencia y supervisión en el desempeño de sus labores. Indica que el contrato escriturado por su ex empleador, corresponde a una clara infracción a la legislación laboral aplicable, ya que jamás se trató de una prestación de servicios a honorarios, sino que, de acuerdo a la naturaleza de las funciones, y al principio de primacía de la realidad, dichos servicios configuraron una efectiva relación laboral en la que se dan los elementos de subordinación y dependencia conforme a las hipótesis normativas de los artículos 7° y 8° del Mandato Laboral.



Señala que la remuneración pactada correspondía a la suma de \$500.000.-, monto que debe considerarse para el pago de todas las prestaciones que se reclaman. Que se pactó jornada ordinaria laboral de 45 horas semanales, distribuida de lunes a viernes, entre las 08.00 horas hasta las 17.00 horas, con una hora de colación, y el sábado desde las 08.00 horas hasta las 13.00 horas.

Expone que el 23 de septiembre del año 2020, tomó la decisión de recurrir a la figura del artículo 171 del Código del Trabajo, esto es, el despido indirecto, toda vez que su ex empleador ha incurrido en la causal del artículo 160 N°7 del Código del ramo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Los incumplimientos son consecuencia de esta informalidad laboral que se denuncia y se traduce en la no escrituración de un contrato de trabajo, por lo que se precisan las siguientes obligaciones laborales no cumplidas: No pagar sus remuneraciones correspondiente a los meses de abril a diciembre del año 2019, y de enero de 2020, hasta la fecha de su despido indirecto, esto es, el 23 de septiembre de 2020; y no pagar íntegramente sus cotizaciones previsionales en AFP Modelo y FONASA, respectivamente, desde marzo de 2018, hasta la fecha de su despido indirecto. El 23 de septiembre de 2020, entregó personalmente en la oficina de partes de I.P.T Limarí Ovalle, carta de autodespido comunicando su decisión, la causal invocada y los hechos y fundamentos de derecho en los que se sostiene la misiva; misma carta fue despachada en igual fecha, a través de Correos de Chile, al domicilio de la demandada.

Señala que la demandada debe ser condenada a pagarle:

- A) Indemnización por años de servicios (3 años). Por la suma de \$ 1.500.000.-
- B) Indemnización sustitutiva del aviso previo. Por la suma de \$ 500.000.-
- C) Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo. Las prestaciones de la letra A precedente con un recargo legal del 50%, esto es por la suma de \$ 750.000.-
- D) Remuneración, correspondiente a los meses de abril a diciembre del año 2019, y de enero de 2020, hasta la fecha de su autodespido, esto es, 23 de septiembre de 2020, por la suma de \$ 8.883.333.-
- E) Feriado legal/proporcional. Por la suma de \$700.000.- correspondiente al periodo que va desde 01 de marzo de 2018, hasta el 23 de septiembre de 2020.
- F) Cotizaciones previsionales. En AFP Modelo, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2019; y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente año 2020. Cotizaciones de salud en FONASA, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,



septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2019; y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente año 2020.

G) Efectos de la nulidad del despido. Todas y cada una de sus remuneraciones y demás prestaciones, desde la fecha del autodespido, hasta la fecha de la convalidación del mismo, usando como base de cálculo su última remuneración mensual \$500.000.-

J) Intereses, reajustes y costas de la causa.

Cita el derecho, el artículo 171 del código del Trabajo, que señala: " si quien incurriera en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuere el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al Juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la terminación, para que este ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento en el caso de la causal de numero 7; en el caso de las causales de los números 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hasta en un ochenta por ciento."

Indica que su ex empleador ha incurrido en la causal legal establecida en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, esto es, " Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo", que los hechos que fueron analizados en el acápite que antecede, tornó insostenible la relación que los vinculaba, y lo forzó a poner término a la misma. En cuanto a las formalidades, el 20 de febrero del presente año, envió carta de autodespido a su ex empleador, en virtud de los hechos ya expuestos, y con igual fecha, comunicó la misma circunstancia a la inspección del trabajo de Ovalle. Agrega que es compatible la aplicación de la sanción de la nulidad del despido con el despido indirecto; que esta mora previsional, es y ha sido ajena a su voluntad, y más aún ha sido en su directo perjuicio al no poder hacer uso de sus beneficios básicos de salud, y le genera lagunas previsionales.

Solicita se haga lugar a la demanda por despido indirecto, nulidad del despido, y cobro de prestaciones laborales, y se condene a la demandada a las siguientes peticiones concretas, con expresa condena en costas.

I.- Que se declare que existió una relación laboral bajo vinculo de subordinación y dependencia entre las partes, la que comenzó el 01 de marzo del año 2018 y terminó por autodespido del demandante, el 23 de septiembre del año 2020.

II.- Que se declare que el autodespido se ajusta a derecho, ya que la demandada incurrió en la causal prevista en el numeral 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

III- Que se declare la nulidad del despido.

IV- Que en consecuencia, se condene a la demandada a pagarle las siguientes prestaciones:



A) Indemnización por años de servicios (3 años). Por la suma de \$ 1.500.000.-; B) Indemnización sustitutiva del aviso previo. Por la suma de \$ 500.000.-; C) Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo. Las prestaciones de la letra A precedente con un recargo legal del 50%, esto es por la suma de \$ 750.000.-; D) Remuneración, correspondiente a los meses de abril a diciembre del año 2019, y de enero de 2020, hasta la fecha de su autodespido, esto es, 23 de septiembre de 2020, por la suma de \$ 8.883.333.-; E) Feriado legal/proporcional. Por la suma de \$700.000.- correspondiente al periodo que va desde 01 de marzo de 2018, hasta el 23 de septiembre de 2020; F) Cotizaciones previsionales. En AFP Modelo, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2019; y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente año 2020. Cotizaciones de salud en FONASA, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2019; y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente año 2020; G) Efectos de la nulidad del despido. Todas y cada una de sus remuneraciones y demás prestaciones, desde la fecha del autodespido, hasta la fecha de la convalidación del mismo, usando como base de cálculo su última remuneración mensual \$500.000.-; J) Intereses, reajustes y costas de la causa.

V- En subsidio, se acoja la demanda por despido indirecto, nulidad del despido, y cobro de prestaciones laborales, se condene a la demandada a hacerle pago de las prestaciones laborales que se estime conforme a derecho y al mérito del proceso, con costas.

**TERCERO:** Que, contestando la demandada, solicita el rechazo de la misma, con costas. Expone que el demandante trabajó durante años en la Sociedad Anónima Humberto Aguirre S.A, la cual era administrada por don Jorge Humberto Aguirre Charlín; dicha vinculación lo fue bajo la modalidad de contrato de trabajo, y se le puso término mediante el correspondiente finiquito, en diciembre del año 2017, sin que quedase prestación alguna adeudada. Respecto del periodo que el demandante señala como fundamento de la demanda, 01 marzo 2018 a septiembre 2020, el demandante no trabajó ni prestó servicios para la sociedad demandada de la forma que narra, asistiendo sólo de forma esporádica y para asuntos específicos a la demandada, lo que en modo alguno permitiría afirmar la concurrencia de los elementos fundantes de una relación laboral. Señala que controvierte todos y cada uno de los hechos planteados:

No es efectivo que el demandante haya prestado servicios como administrativo, labores en terreno, y en general "para cualquier función que le encomendara el empleador", en el



periodo desde 01 marzo 2018 a 23 septiembre 2020. La afirmación es falsa; agrega en el libelo que las “labores realizadas” lo habrían sido en el Fundo que la empresa demandada dedicaba para el trabajo agrícola, ubicado en Hacienda Tuquí s/n Ovalle, lo que no se condice en absoluto con la realidad, ya que la empresa se encuentra dedicada desde el año 2015 al negocio inmobiliario, y el referido fundo Hacienda Tuquí, conformado por dos Lotes, había sido transferido el Lote A, el año 2017 a la empresa Inversiones y Asesorías H Y C S.A, y el Lote B, objeto de subdivisión predial, en 217 lotes, los cuales se encuentran en la actualidad a la venta, por lo que no se realizan desde el año 2015 labores agrícolas de ninguna especie en el referido Fundo Hacienda Tuquí. Niega que entre las partes haya existido una relación laboral. No es efectivo que el demandante haya prestado servicios bajo vínculo de dependencia y subordinación a cambio de una remuneración para la empresa demandada. Tampoco es efectivo, que las funciones que refiere, lo hayan sido en forma habitual y permanente. No es efectivo que haya cumplido horarios, y menos que haya firmado un libro de registro de asistencia, ni que hubiese estado sujeto a jornadas de trabajo y a la supervisión y poder de mando de don Alejandro Aguirre Mendez. No es efectivo que se haya pactado una remuneración mensual por la suma de \$500.000, entre el demandante y la demandada.

Es efectivo que una vez finiquitado en diciembre del año 2017 el contrato de trabajo que existió entre demandante y demandada; posteriormente en el año 2018, 2019 y 2020, cuando esporádicamente se requirió desarrollar alguna labor o trabajo de su competencia, se le solicitó al demandante la prestación de sus servicios y estos fueron oportunamente cancelados, especialmente por la relación de confianza que existió, por tantos años de trabajo que anteriormente prestó a la empresa.

Es efectivo que nunca se extendió un contrato de trabajo en los términos que exige la ley laboral porque no correspondía, en atención a que ambas partes asumieron el compromiso de vincularse en una relación de naturaleza civil y no laboral.

Se niega que adeude las prestaciones demandadas, por cuanto estamos en presencia de una relación de carácter comercial, civil y no de naturaleza laboral.

Deduce excepción de incompetencia del Tribunal, en atención a que carece de facultades para conocer de la materia toda vez que el actor jamás presto servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, no concurriendo los supuestos que la califican. La materia que se discute no es de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo toda vez que no está comprendida dentro de aquellas que el artículo 420 del Código del Trabajo establece como de su competencia, ya que nunca existió una relación laboral sino solo una prestación de servicios de carácter civil, por ello no se firmó un contrato de trabajo en los términos que exige la ley laboral; el demandante no tenía obligación de asistencia ni de cumplimiento de horario; no estaba sujeto a control o firma de asistencia; no hubo continuidad en los servicios; no existía vínculo de subordinación y dependencia, no existió



una remuneración pactada. Por aplicación del principio de buena fe y la doctrina del acto propio, resulta jurídicamente incomprensible e inconsistente que el demandante reclame ahora la condición de trabajador, ya que es imposible que la demandada deba remuneraciones durante todo el año 2019 y 2020 y no haber demandado con anterioridad.

En subsidio de lo anterior, contesta la demanda y solicita que sea rechazada en todas sus partes, con costas, por no ser efectivos los hechos en que se funda y en atención a que el servicio prestado esporádicamente por el demandante no reúne las condiciones para ser considerado contrato de trabajo. El actor jamás prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, no concurriendo en la especie los supuestos que la califican. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 letra b) del Código Laboral, “trabajador: toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo...”. Que, según lo señalado por el artículo 7° del Código del Trabajo, el contrato individual de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, por el cual el primero se compromete a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia de un empleador, quien se compromete a pagar una remuneración por los servicios prestados. A partir esta definición se puede establecer que el contrato de trabajo supone la existencia de un acuerdo entre empleador y trabajador, prestación de servicios personales del trabajador, pago de una remuneración por el empleador, relación de subordinación o dependencia, bajo la cual se prestan los servicios. Esta relación de subordinación o dependencia se traduce en la facultad o poder del empleador de dar instrucciones u órdenes al trabajador. A su vez, el artículo 8° del Código del Trabajo, establece que toda prestación de servicios que se realice bajo subordinación y dependencia de un empleador, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, se manera que podemos decir que los requisitos para constituir un contrato de trabajo son: la prestación de servicios personales; la existencia de una remuneración por dicha prestación, y la ejecución de esta prestación bajo subordinación y dependencia. Ahora bien, estos elementos o requisitos, que jurídicamente dan origen a la existencia de un contrato de trabajo, deben evidenciarse por ciertos hechos y circunstancias concretas y comprobables, incluso bastaría la existencia sólo de algunos, siempre que sean determinantes para demostrar el vínculo de subordinación y dependencia que da origen al contrato. De estos elementos, la subordinación o dependencia es la característica determinante de la relación, la subordinación o dependencia es el sometimiento - en relación a las labores ejecutadas - a la forma y condiciones impuestas por el empleado, se materializa por la obligación del trabajador, de forma estable y continua, de mantenerse a las órdenes del empleador y de acatarlas, hay un poder de mando del empleador, traducido en la facultad de impartir instrucciones, de dirigir la actividad del



trabajador, de controlarla. En otros términos, para que una persona detente la calidad de trabajador se precisa: a) Que preste servicios personales, ya sean intelectuales o materiales; b) Que la prestación de dichos servicios la efectúe bajo vínculo de subordinación o dependencia, y c) Que como retribución a los servicios prestados reciba una remuneración determinada. En relación con la subordinación o dependencia, esta se materializa a través de diversas manifestaciones concretas, tales como la continuidad y estabilidad de los servicios prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones, la subordinación a instrucciones de diversa índole, circunstancia esta última que se traduce en el derecho del empleador a dirigir al trabajador impartiendo órdenes e instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las labores y en el deber del trabajador de acatar y obedecer las mismas, manteniéndose permanentemente bajo dicha órdenes. Cita doctrina y jurisprudencia española. La subordinación implica para el empleador, el poder de dirección, organización, vigilancia y disciplina en la entidad jerarquizada que es la empresa y para el trabajador la obligación de obedecer ese poder. Ese poder de disposición del empleador de toda la persona de su trabajador, correlativo al deber de este de permanecer físicamente sujeto a ese poder durante un espacio de tiempo, convierte el contrato de trabajo en el contrato presencial por excelencia. En conclusión, faltando alguno de los requisitos señalados, no se tiene la calidad de trabajador, y por ende no existe contrato de trabajo en los términos consagrados por el Código del Trabajo. Aun mas, el solo hecho de concurrir respecto de una relación jurídica, alguno de los elementos característicos de la subordinación o dependencia, por si y ante sí, tampoco autorizan para catalogarla de laboral. Negada la relación laboral, como de hecho ha ocurrido, la parte demandante se verá en la necesidad de acreditar que su supuesto puesto de trabajo como “administrativo” cumplían los elementos propios del vínculo de subordinación y dependencia. No hay control de asistencia, no hay obligación de cumplimiento de horario, no hay control directo e inmediato de las labores, no hay continuidad, no hay contraprestación económica regular por los servicios, no hay exclusividad, no hay cumplimiento permanente de instrucciones. Corresponderá al demandante acreditar lo contrario. Al actor le está vedado ir contra sus propios actos, porque hacerlo contraviene frontalmente el principio de buena fe. En efecto, la buena fe es un patrón de conducta indicativo de la orientación que el derecho pretende dar al individuo en sus relaciones individuales. Se muestra como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, de no defraudar la ley, en la honesta y leal concertación y cumplimiento de los negocios jurídicos. Cita la doctrina de los actos propios, y señala que no es procedente que una persona que se comprometió a prestar servicios particulares a honorarios en forma esporádica, ahora reclame falsamente que existía un contrato de trabajo no escriturado; bajo el principio de buena fe, posteriormente



modifique su postura y perjudique a su contraparte, queriendo enriquecerse sin causa alguna. Recién ahora, infundadamente, el actor pretende enmarcar la relación de las partes (que es civil) dentro del ámbito laboral, buscando ampararse dentro de sus normas para obtener beneficios que en realidad nunca existieron ni siquiera estuvieron dentro de su órbita de expectativa.

Sobre las prestaciones que se demandan:

a) Sanción por nulidad del despido. Hace presente la inaplicabilidad del artículo 162 del Código del Trabajo, puesto que consta de la lectura del libelo que el actor, dentro de las pretensiones, pide al tribunal que se declare que su despido fue nulo obligando a la demandada a pagar las remuneraciones hasta la convalidación del despido, pretensión que debe ser rechazada por ser absoluta y totalmente improcedente por lo siguiente: La jurisprudencia de los tribunales de justicia sentó las siguientes conclusiones: El objeto del artículo recién citado es incentivar el pago de las cotizaciones previsionales por parte de los empleadores que hayan efectuado la retención de los dineros respectivos de donde se desprende que no cabe esta sanción si el empleador no retuvo a los trabajadores el valor de tales cotizaciones, porque las partes convinieron un contrato netamente civil, no sujeto a la legislación previsional. Es evidente que jamás se retuvo al actor suma alguna por concepto de cotizaciones previsionales, ya que como se ha sancionado precedentemente, jamás existió vinculación laboral alguna entre las partes de este juicio, ya porque si se estableciera alguna, siempre y desde el primer momento las partes tuvieron la preclara convicción de que la vinculación no era de naturaleza laboral, por lo que malamente se podría haber exigido dicha conducta. En conclusión, y sin perjuicio de la inexistencia de una vinculación de orden laboral entre las partes, los hechos asentados y la doctrina de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, deben llevar a rechazar la solicitud de nulidad de despido impetrada.

b) Cotizaciones de Seguridad Social por todo el periodo trabajado, remuneraciones pendientes, indemnizaciones, feriado legal y feriado proporcional, más reajustes e intereses. Estos items, son enteramente inoponibles al ser estos beneficios propios de un trabajador que celebra un contrato de trabajo y no corresponden a una prestación de servicios de carácter civil que es el vínculo contractual que existió con el demandante.

c) Costas. Nada se debe al respecto y porque señala tiene motivos plausibles para litigar. Pide tener por opuesta excepción de incompetencia del tribunal y acogerla, con costas; en subsidio, tener por contestada la demanda en cuanto al fondo, en el sentido que atendido a que no son efectivos los hechos en que se funda, se declare: a) que entre las partes no existió contrato de trabajo sino solo una prestación servicios carácter civil; b) que en atención a que no existió relación laboral entre las partes, se rechaza la demanda interpuesta por el Jorge del Carmen Saavedra Vásquez; c) que se condena en costas al demandante.





**CUARTO:** Que, en audiencia preparatoria, se dio traslado a la excepción opuesta; Se llamó a conciliación, y al no prosperar este, se recibió la causa a prueba y se fijó como hechos a probar:

1. Efectividad de haber prestado el actor servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada. En la afirmativa, estipulaciones contractuales, especialmente naturaleza y duración del mismo, fecha de inicio de la relación laboral, labores realizadas, jornada de trabajo, horario, y remuneración pactada y efectivamente percibida por el actor.
2. Efectividad del autodespido del demandante. En su caso, fecha y si se dio cumplimiento íntegro a las formalidades del mismo.
3. Efectividad de que la demandada incurrió en la causal de despido invocada por el demandante; esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que imponía el contrato del actor. En la afirmativa, hechos que comprendían tal incumplimiento.
4. Efectividad de adeudarse al trabajador sumas por indemnización por años de servicio, remuneraciones y feriado legal y proporcional.
5. Estado de pago de las cotizaciones de AFP y de salud del demandante. Períodos y montos.
6. Efectividad de haber existido entre las partes una prestación de servicios de carácter civil. En su caso, condiciones pactadas.

**QUINTO:** Que, en audiencias de juicio las partes incorporaron su prueba, al efecto la demandante incorporó los siguientes medios de prueba;

**a) Documental:**

1. Contrato de prestación de Servicios y honorarios de fecha 01 de marzo de 2018.
2. Carta de auto despido de fecha 23 de septiembre de 2020.
3. Comprobante de envío carta de auto despido, de fecha 23 de septiembre de 2020.
4. Certificado de cotizaciones de AFP Modelo del demandante, de fecha 22 de septiembre de 2020.
5. Certificado de cotizaciones de FONASA del demandante, de fecha 23 de septiembre de 2020.
6. Control de asistencia del trabajador don Jorge Saavedra. Vásquez, comprende períodos de abril de 2019 a marzo de 2020, consta de 12 hojas.

**c) Testimonial:** Declararon, a través de la plataforma zoom, y previo juramento de rigor, constando íntegramente sus declaraciones en registro de audio:

- 1.- Carlos Del Carmen González Saavedra.
- 2.- Ruth Lorena Vega Contreras.
- 3.- Carmen Gloria Ramona Saavedra Concha.

Que, en su oportunidad, la demandada incorporó los siguientes medios de prueba,

**a) Documental:**



1. Copia escritura de reconocimiento, dación en pago, consentimiento, alzamiento y autorización Humberto Aguirre S.A y otro, de 7 de julio de 2017, respecto de LOTE A, que corresponde al Saldo o parte de la Higuera Primera del Fundo Tuquí, ubicado en Sector de Tuquí, comuna de Ovalle, otorgada en Notaría de Ovalle de Notario Público don Rodrigo Cabrera Albarrán.
2. Copia escritura de compraventa Alzamiento e Hipoteca entre Humberto Aguirre S.A, Banco Santander e inversiones y ASESORIAS H Y C S.A, de 10 de noviembre de 2017, respecto de LOTE A, que corresponde al Saldo o parte de la Higuera Primera del Fundo Tuquí, ubicado en Sector de Tuquí, comuna de Ovalle, Repertorio 18794/2017, Notaría de Santiago de Notario Público don Jorge Lobos Díaz.
3. Certificado N° IV-L-21, emitido por SAG, que certifica que la presente división del predio denominado LOTE B de la subdivisión de la primera higuera de Tuquí, ubicado en subdivisión de Huamalata, comuna de Ovalle, Rol avalúo 634-18 a nombre de Humberto Aguirre S.A, cumple con normativa vigente de subdivisión Predios Rústicos.
4. Copia de escritura compraventa de Humberto Aguirre S.A a Summertown Inversiones Inmobiliarias EIRL, de 8 de abril de 2019, respecto de la parcela B-TRES, resultante de la subdivisión Lote B. Fojas 3938, Repertorio 1070/2019, Notaría de Ovalle, Notario Público don Eugenio Jiménez Larraín.
5. Copia de escritura compraventa de Humberto Aguirre S.A a Ruth Lorena Vega Contreras, de 10 abril 2019, respecto de la parcela B-sesenta y ocho, resultante de la subdivisión Lote B. Fojas 4072, Repertorio 1120/2019, Notaría de Ovalle, Notario Público don Eugenio Jiménez Larraín.
6. Copia de escritura compraventa de Humberto Aguirre S.A A Ruth Lorena Vega Contreras, de 10 de abril de 2019, respecto de la parcela B sesenta y nueve, resultante de la subdivisión Lote B. Fojas 4066, Repertorio 1119/2019, Notar a de Ovalle, í Notario Público don Eugenio Jiménez Larraín.
7. Copia de reducción a escritura pública de Acta de Sesión Extraordinaria del Directorio "Humberto Aguirre S.A, de 2 de mayo de 2019, que designa como Gerente General de H.A.S.A, a don Alejandro Aguirre Méndez, ante el fallecimiento de don Jorge Humberto Aguirre Charlín.
8. Copia de solicitud de subdivisión de Predios Rústicos, efectuada al SAG, de fecha 27 de diciembre de 2017, por don Humberto Aguirre Charlín, representante legal de H.A.S.A
9. Copia de Boleta de Honorarios de fecha 20 de marzo de 2020, por la suma de \$1.785.000, de Jorge Saavedra Vásquez.
10. Copia de plano de subdivisión predial LOTE B Hacienda Tuquí, comuna de Ovalle.
11. Copia cheque pagado nominativo a Jorge Saavedra Vásquez, por la suma de \$1.785000, de 20 de marzo 2020.



**b)Confesional:** Declaró, a través de la plataforma zoom, y previo juramento de rigor, constando íntegramente su declaración en registro de audio, don Jorge del Carmen Saavedra Vásquez.

**c)Testimonial:** Declararon, a través de la plataforma zoom, y previo juramento de rigor, constando íntegramente sus declaraciones en registro de audio:

1. Bruno Aníbal Pinto Pezoa.
2. Hamna Elías Misleh Álamo.
3. Iván Mauricio Jacob Dubó.

**SEXTO:** Que, en cuanto a la excepción de incompetencia del tribunal, debemos tener presente que el actor demanda se declare que entre las partes existió una relación laboral, y que terminó por un despido indirecto, despido que además pide se declare nulo, alega, además, que se le adeudan prestaciones laborales; que el artículo 420 del Código del Trabajo establece que serán de competencia de los juzgados del trabajo, letra a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo. De lo anterior se colige que las materias demandadas se encuadran plenamente en la hipótesis del artículo 420 ya transcrito, por esa razón el conocimiento de las materias demandadas corresponde a un Juzgado del Trabajo.

Que distinto es que en este juicio se deba determinar la existencia o no de una relación laboral entre las partes. Materia que también se encuadra en las hipótesis del artículo 420 letra a), por lo que se deberá rechazar la excepción planteada.

**SEPTIMO:** Que, el artículo séptimo del Código del Trabajo, establece, que “contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”.

Que, este acuerdo de voluntades se perfecciona por el solo consentimiento de las partes en los servicios a prestar y en la remuneración que se pagará por el mismo. Así las cosas, y virtud del principio de primacía de la realidad, el legislador dispone en el artículo 8°, que estaremos en presencia de un contrato de trabajo en tanto podamos distinguir en una vinculación una prestación de servicios determinada y el pago de tales servicios, apareciendo como elemento determinante que los servicios se prestan bajo vínculo de subordinación y dependencia.

**OCTAVO:** Que, con la prueba rendida, se ha podido acreditar lo siguiente:

1.- Que el 01 de marzo de 2018, las partes suscribieron un contrato de prestación de servicios a honorarios, donde las funciones establecidas para el actor son las de servicios administrativos y/o labores en terreno en la empresa, funciones que podía desempeñar en las oficinas de la empresa o fuera de ellas; el contrato señala que no estará sujeto a horario de trabajo, fiscalización directa e inmediata; que no tendrá la obligación de



efectuarle imposiciones y tampoco responderá por enfermedades profesionales o accidentes; que se conviene en pagar como honorario líquido la suma de \$500.000.-, que serán cancelados los primeros 5 días de cada mes, previo giro de boleta de servicios por el encomendado; y dejan constancia de que el actor ingresa al servicio con esa misma fecha. Lo anterior se desprende del contrato incorporado por el actor.

2.- Que el 23 de septiembre de 2020, el actor presenta a la demandada carta de auto despido, invocando la causal de incumplimiento grave de las obligaciones emanadas del Contrato de Trabajo, y la funda señalando que se le escrituró un contrato de prestación de servicios y honorarios, cuando en los hechos, de acuerdo a la naturaleza de las funciones realizadas, y al principio de primacía de la realidad, dichos servicios configuraron una efectiva relación laboral en la que se dan los elementos de subordinación y dependencia; señala que durante los años que trabajó para su empresa, realizando labores en terreno propias de la administración y explotación de un fundo agrícola, se mantuvo bajo la subordinación y dependencia del señor Alejandro Aguirre Méndez, presentante legal de Humberto Aguirre S.A., cumpliendo fielmente con sus órdenes e instrucciones de trabajo, realizando labores que siempre fueron habituales y permanentes, y en caso alguno se trataron de servicios específicos o determinados, que se realizaran transitoriamente. Además, señala que estuvo sujeto a jornadas de trabajo, cumpliendo horarios, supeditadas al poder de mando del señor Aguirre, jornadas laborales de 45 horas semanales, y se encontraba supeditado al deber de obediencia y supervisión en el desempeño de sus funciones, rindiendo cuentas de mis labores directamente al señor Aguirre. Que a causa de esta informalidad laboral precisa las siguientes obligaciones laborales no cumplidas: No pagar sus remuneraciones correspondientes a los meses de abril a diciembre del año 2019, y de enero de 2020, hasta la fecha de su autodespido, esto es, 23 de septiembre del presente año 2020; No pagar sus cotizaciones previsionales desde marzo del año 2018, hasta la fecha de su autodespido, y que se le adeudaría indemnización por años de servicios, Indemnización sustitutiva del aviso previo y las remuneraciones por los meses señalados. Lo anterior se tiene por acreditado por la carta de autodespido que se incorporó por la demandante como medio probatorio, y se acompañó también comprobante de envío de dicha misiva al demandado, con la misma fecha, 23 de septiembre de 2020, por lo que se tendrá por acreditado el cumplimiento de formalidades.

3.- Que de acuerdo al certificado de cotizaciones de AFP Modelo, de 22 de septiembre de 2020, el actor registra cotizaciones hasta el mes de diciembre de 2017, por el rut pagador 76.607.520-7, que corresponde a la demandada de autos.

4.- Que la Hacienda Tuquí, fue dividida en dos lotes, A y B, el primero fue transferido en el año 2017 por el representante de la demandada; y el lote B se subdividió en 217 lotes, de



una superficie superior a cinco mil metros cuadrados cada uno, el día 5 de octubre de 2018.

5.- Que el 2 de mayo de 2019 se nombra gerente general de la sociedad demandada a don Alejandro Aguirre Mendez, atendido el fallecimiento de su padre, don Jorge Humberto Aguirre Charlin.

6.- Que el 20 de marzo de 2020, la demandada HUMBERTO AGUIRRE S.A. emitió al demandante una boleta de prestación de servicios de terceros electrónica, por “servicios”, por \$2.000.000.-, lo que descontado el impuesto da un total de \$1.785.000.-

7.- Que el día 20 de marzo de 2020, Alejandro Aguirre emitió al demandante un cheque por \$1.785.000.- del Banco Bice.

Que desde el numeral 3 al 7 se ha tenido por acreditado atendida la documental de la demandada, consistente en escrituras, certificado, copia de boleta de honorario y de cheque, enumerados con los numeros 1 al 11 de su documental.

**NOVENO:** Que de lo ya tenido por establecido, y de acuerdo a la testimonial prestada por Carlos González Rivera, y a la confesional prestada por Jorge Saavedra Vásquez, tenemos que efectivamente el actor prestó servicios para el demandado desde antes de firmar un contrato de prestación de servicios a honorarios en marzo de 2018, así, trabajó con contrato de trabajo por aprox. 30 años, relación que su empleador finiquita y decide cambiar a modalidad de honorarios. Antes de firmar este contrato a honorarios, el actor se desempeñaba en el fundo Tuquí, realizando labores administrativas, de bodega, estaba a cargo de los trabajos en las parcelas de agrado, se encargaba del riego, siendo la mano derecha de don Humberto Aguirre Charlin, su horario de trabajo era de 8 a 17:00 horas de lunes a viernes, y su remuneración era de \$500.000.-; firmaba un registro de asistencia y recibía las órdenes que eran impartidas por don Humberto Aguirre. Que el giro de la demandada era agrícola, y en 2017, atendidas las subdivisiones realizadas en el Lote B de la hacienda, también pasó a ser inmobiliario.

Que de las mismas declaraciones puede extraerse que, luego de firmado el contrato de honorarios, en marzo de 2018, con las estipulaciones señaladas en el numeral 1 del considerando octavo, las funciones del actor siguieron siendo las mismas ya señaladas, y que el giro inmobiliario que comenzó la demandada, y el mermado trabajo agrícola, no redujo las obligaciones del actor, quien, desempeñando labores administrativas y de terreno, fue la persona de confianza de don Humberto Aguirre Charlin, y luego de fallecido este en abril del año 2019, siguió ejecutando sus labores para el hijo, y quien quedó como gerente de la sociedad demandada, don Alejandro Aguirre Méndez. Que consta que al menos se emitió una boleta de prestación de servicios a tercero, emitida por la demandada al actor, y que no existe prueba que demuestre que este emitió boletas de honorarios a la misma demandada. Que siguió el actor cumpliendo el mismo horario de trabajo de 8:00 a 17:00 horas, cumpliendo órdenes, firmando libro de asistencia, y así



estando a disposición de la demandada exclusivamente, hasta que llegado el mes de marzo de 2020, es enviado a su casa por la pandemia, y luego, en el mes de septiembre del mismo año, el actor decide presentar su autodespido.

Que si bien consta de la documental que existe un contrato de prestación de servicios firmado por el actor, en el cual se desconoce cualquier subordinación y dependencia entre las partes, en los hechos, lo que existió fue una relación laboral, tal y como ya había existido anteriormente entre las partes, previo a la suscripción del documento ya señalado y regido por lo que disponen los artículos 7 y 8 de nuestro Código Laboral.

Que, lo anterior nos lleva a establecer la existencia de una relación laboral entre las partes que se llevó en informalidad, atendida la inexistencia del contrato de trabajo correspondiente.

**DECIMO:** Que habiéndose establecido la existencia de una relación laboral, corresponde analizar lo relativo a la procedencia del despido indirecto. Que, atentos a lo que señala la doctrina el despido indirecto, como acto jurídico, requiere de la concurrencia de ciertos requisitos esenciales, a saber, la voluntad del trabajador de poner término a su contrato de trabajo, que se invoque alguna de las causales establecidas en la ley y, por cierto, que exista una relación laboral y que esta se encuentra vigente.

Que, en consecuencia, es necesario señalar que el actor decide poner término a su contrato de trabajo con fecha 23 de septiembre del año 2020, según aparece de la carta redactada al efecto, carta que fue remitida al empleador con la misma fecha a las 11:53 horas. Que, en consecuencia se ha logrado así determinar que el trabajador remite su carta aviso de despido cuando su contrato se encontraba vigente, por lo que se cumplen los requisitos de fondo del auto despido.

**UNDECIMO:** Que, el artículo 171 del Código del Trabajo establece que si quien incurriere en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuera el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato de trabajo y concurrir ante el juzgado respectivo, dentro del plazo legal, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones que correspondan.

Que, al efecto el actor invoca la causal del artículo 160 N°7, del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Que, esta causal requiere para su configuración que el empleador incurra en incumplimiento contractual y que este incumplimiento sea grave. Por lo que corresponde el análisis de los hechos en que el actor funda la causal, esgrimidos en la carta de auto despido de fecha 23 de septiembre de 2020.

**DUODECIMO:** Que, en lo que dice relación con el primer hecho denunciado: En cuanto a no escriturar contrato de trabajo. Que, al respecto, ya se ha tenido por establecido que la demandada no redactó un contrato de trabajo para el actor, por lo que se tiene por acreditado este hecho.



Luego, se señala un segundo hecho, que la demandada incumplió su obligación de pagar remuneraciones, y que le adeuda a esa fecha las correspondientes a los meses de abril a diciembre del año 2019, y de enero de 2020 hasta la fecha de su autodespido, el 23 de septiembre de 2020. Al efecto se acompañó por la demandada prueba documental consistente en una boleta de honorarios de fecha 20 de marzo de 2020, por \$2.000.000.-, suma que luego de descontado el impuesto aparece del mismo documento da un total líquido de \$1.785.000.-, y un cheque emitido el mismo día por Alejandro Aguirre al demandante, por la suma de \$1.785.000.-

Que ya se ha tenido por establecido que la remuneración a pagar al actor era de \$500.000.-, suma que percibía antes de incluso suscribir el mentado contrato de honorarios, así, de la declaración testimonial de Ruth Vega Contreras, quien trabajó también para la demandada, podemos extraer que este cambio de modalidad, en que de trabajar con contrato de trabajo y ser finiquitado, luego firma el actor, en marzo de 2018, un contrato de honorarios, situación que es recomendada a don Humberto Aguirre por la empresa contable de la época, para así no hacerse cargo del pago de imposiciones de los trabajadores, situación que compartieron al menos 7 trabajadores. Es decir, del tiempo que se señala en la carta, no se habrían pagado remuneraciones, sólo tenemos que existe un pago por \$1.785.000.- por parte de la demandada, y considerando que la remuneración era de \$500.000 mensuales, y que no existe constancia del pago de lo demás demandado, existe un incumplimiento por parte de la demandado al respecto.

Que de la misma testimonial señalada, e incluso de la declaración de Carlos González Rivera, puede desprenderse la relación de confianza que existía entre el actor y don Humberto Aguirre, el actor fue catalogado por estos como su mano derecha, su persona de confianza, por lo que después de trabajar 30 años para él, no extraña a esta jueza que no haya demandado antes por el incumplimiento respecto a las remuneraciones, ya que habida este tipo de relación, el actor siguió trabajando y estando a disposición de Humberto Aguirre y luego de quien lo sucedió en la sociedad, su hijo Alejandro Aguirre, así, de la misma testimonial se desprende que se gastó en este periodo sin pago lo que le habían pagado de finiquito antes de hacerle un contrato a honorarios.

**DECIMO TERCERO:** Que, en consecuencia, se ha logrado establecer que el empleador incumplió con las obligaciones que se anotan en la carta de autodespido, obligaciones que son de la esencia del contrato de trabajo, esto es, el no pago de las remuneraciones pactadas en el contrato. Además no se escrituró contrato de trabajo. Que el primero de los incumplimientos anotados basta a esta jueza para establecer que se trata de un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, por lo que se acogerá la demanda intentada.



**DECIMO CUARTO:** Que, en cuanto a las prestaciones demandadas. Que, el actor demanda las indemnizaciones que emanan del despido; que considerando que la relación laboral se pactó desde el 1 de marzo de 2018, y que el actor se vio en la necesidad de poner término por causas imputables a su empleador, se acogerá la demanda en aquella parte que solicita indemnización por años de servicio y la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, como se dirá en lo resolutivo.

**DECIMO QUINTO:** En cuanto a las remuneraciones y feriado demandado. Que se ha establecido en autos que el demandado incumplió respecto al pago de las remuneraciones, que el tiempo que se demanda es de abril a diciembre del año 2019, y de enero de 2020 hasta la fecha de su autodespido, el 23 de septiembre de 2020, por lo que se acogerá la demanda en ese aspecto, considerando que existe un pago por \$2.000.000, el que se descontará del total, ya que no hay prueba que explique que ese pago tuvo otro origen que no fuera el contrato laboral entre las partes, y que, de acuerdo a la testimonial, puede desprenderse que el actor recibió el pago por la retención efectuada en la boleta que consta en la causa. Igual suerte correrá la demanda de feriado legal y proporcional, el que, atendido lo dispuesto en el artículo 73 del Código del Trabajo y teniendo presente que la demandada no probó que se hubiere otorgado, compensado o pagado de otra forma, se accederá a este en los mismos términos en que se solicita.

**DECIMO SEXTO:** En cuanto a la nulidad del despido intentada. Que, con los medios de prueba incorporados en audiencia se ha logrado establecer que las cotizaciones del actor, correspondiente al periodo trabajado entre el 1 de marzo de 2018 y el 23 de septiembre de 2020, de AFP Modelo y Fonasa, no se encuentran pagadas hasta el último día del mes anterior al del despido, en consecuencia, se configura la nulidad de despido intentada.

En cuanto a la nulidad del despido, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia se inclina por comprender dentro del vocablo despido utilizado por el artículo 162 del Código del Trabajo, no solo a aquella voluntad privativa del empleado de poner término al contrato de trabajo, sino que también incluir la decisión del trabajador de poner término a su contrato invocando las facultades del artículo 171 del Código de la especialidad, de manera que los efectos del ejercicio del auto despido deben ser los mismos que emanan de la decisión unilateral del empleador de dar por finiquitado el vínculo, de modo tal que si el empleador incumplió su obligación de pagar las remuneraciones, hace procedente que se aplique a su respecto la sanción del inciso 5° del artículo 162 de Código del Trabajo.

**DECIMO SEPTIMO:** Que, la prueba se apreció conforme a las reglas de la sana crítica y que los medios de prueba no suficientemente analizados en nada alteran la decisión que se ha alcanzado, especialmente la declaración testimonial de la parte demandada, la que en su totalidad es prestada por personas que, sin perjuicio de que conocían a don Humberto Aguirre y a su hijo Alejandro Aguirre, no conocieron de los hechos de la causa





con el detalle necesario, ya que sólo concurrían esporádicamente a la Hacienda Tuquí, donde prestó servicios el actor, motivo por el cual se desestima como medio probatorio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5 a 11, 21, 22, 34, 35, 41, 42, 44, 54 a 58, 67, 73, 160 N°7, 162, 163, 168, 172, 173, 174, 420, 423, 425 a 432, 434 a 438 y 440 a 462, del Código del Trabajo;

Se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia del Tribunal.

II.- Que, **se acoge** la demanda intentada por JORGE DEL CARMEN SAAVEDRA VASQUEZ, seguida en contra de HUMBERTO AGUIRRE S.A., representada por don Alejandro Aguirre Méndez, todos ya individualizados, solo en cuanto se declara que, habiendo existido una relación laboral desde el día 1 de marzo de 2018, esta terminó por despido indirecto el día 23 de septiembre de 2020, haciéndose aplicable en la especie la sanción de nulidad del despido, debiendo el demandado pagar al actor las siguientes prestaciones:

1.- \$1.500.000.- a título de indemnización por años de servicio.

2.- \$500.000.- a título de indemnización sustitutiva del aviso previo.

3.- \$ 750.000, a título de incremento del artículo 171 del Código del Trabajo.

4.- \$700.000.- a título de feriado legal y proporcional, por el periodo trabajado.

5.- \$6.883.333.- por remuneraciones adeudadas, entre abril de 2019 y el 23 de septiembre de 2020.

6.- Las remuneraciones y demás prestaciones por el periodo comprendido entre la fecha del autodespido, 23 de septiembre de 2020, y la convalidación del mismo, en razón de \$500.000.- por remuneración mensual.

III.- Que se adeudan cotizaciones previsionales en AFP Modelo, y en FONASA correspondiente a los meses que corren entre marzo del año 2018, y agosto del año 2020, los que deberán ser cobradas por la entidad previsional y de salud correspondiente.

IV.- Que, las sumas ordenadas pagar deberán serlo reajustadas, conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

V.- Que, no se condena en costas a la demandada, por estimar que litigó con motivo plausible.

Regístrese, y archívese en su oportunidad.

Notifíquese a las partes a través de correo electrónico.

R.I.T. O-45-2020

Dictada por doña María Alejandra Ríos Teillier, Jueza Titular del Primer Juzgado de Letras de Ovalle.



En Ovalle a trece de septiembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

